

**En la sesión ordinaria efectuada el treinta de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:**

**Acuerdo mediante el cual se califica la excusa presentada por la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contralora del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa I/001/2016/PRA.**

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el licenciado Saúl Rocha Arias, otrora Vocal Secretario, de Administración y del Servicio Profesional de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz, presentó en la Secretaría Ejecutiva del Instituto, escrito de denuncia en contra de Miguel Magaña Ávila, Vocal Ejecutivo de la Junta mencionada.

Este escrito fue turnado a la Contraloría del Instituto en esa misma fecha.

**SEGUNDO.** Que el diez de marzo de dos mil dieciséis, la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contralora del Instituto, radicó la denuncia señalada en el resultando anterior e inició el procedimiento de investigación número I/001/2016/PRA.

**TERCERO.** Que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la maestra Ileana Catalina Sánchez Arriola, contralora del Instituto, dictó un auto dentro del procedimiento de investigación referido en el resultando anterior, mediante el cual se excusa de conocer de la denuncia presentada por el licenciado Saúl Rocha Arias, otrora Vocal Secretario, de Administración y del Servicio Profesional de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz, y ordena remitir la excusa y el expediente al Consejo General del Instituto para que sea este quien la califique. Asimismo, en dicho auto se ordenó la suspensión del procedimiento de investigación citado.

La excusa anterior fue remitida al Consejo General del Instituto el día veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio número C/0270/2016.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** Que el artículo 451, fracción X, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, dispone que la Contraloría del Instituto es competente para emitir los lineamientos, instruir,

desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto.

**SEGUNDO.** Que el artículo 169 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que cuando un servidor público se encuentre en algunos de los supuestos señalados en el artículo 29 de ese ordenamiento —los cuales establecen los impedimentos para conocer de un asunto—, se excusará de intervenir en el procedimiento administrativo y lo suspenderá; comunicará el hecho y turnará el expediente a su superior jerárquico para que resuelva lo conducente dentro de los tres días siguientes.

**TERCERO.** Que el artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los servidores públicos estarán impedidos para intervenir o conocer de un procedimiento cuando:

- I. Tengan interés directo o indirecto en el asunto de que se trate;
- II. Sean parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el segundo grado, civiles por afinidad, de alguno de los interesados, de sus patronos o representantes;
- III. Hayan sido patronos o apoderados en el mismo asunto;
- IV. Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus patronos o representantes;
- V. Hayan dictado el acto o intervenido con cualquier carácter en su emisión o en su ejecución;
- VI. Figuren como parte en un procedimiento o proceso administrativo similar; y
- VII. Estén en una situación análoga o más grave que las anteriores.

**CUARTO.** Que los párrafos segundo y tercero del artículo 171 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen que tratándose de excusas que se declaren procedentes, la resolución que la declare deberá contener el nombre del servidor público que deberá conocer del asunto, quien habrá de tener la misma jerarquía del servidor público impedido y que, en caso de no existir servidor público de igual jerarquía, el superior jerárquico conocerá directamente del asunto.

**QUINTO.** Que el licenciado Saúl Rocha Arias, otrora Vocal Secretario, de Administración y del Servicio Profesional Electoral de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz, en su escrito de denuncia, manifiesta lo siguiente:

[...] 1.- El día 17 de diciembre de 2015, a las 14:00 horas, nos encontrábamos los tres vocales de la oficina de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz, apenas almorzando camarones en un establecimiento sin nombre de la ciudad de san (sic) Luis de la Paz; cuando me percate (sic) que sonó el teléfono celular del Lic. Miguel Magaña Ávila, y alcance (sic) a escuchar que era Verónica Hernández Loyola, quién (sic) le informaba que en la oficina se encontraba una Señora (sic) de nombre María Elizabeth Ramírez García y que decía que había fungido como capacitadora en el proceso electoral pasado y que acudía a entregar un morral de una casilla que contenía actas originales de la elección 2015; a lo que el Lic. Miguel Magaña Ávila, le respondió: recíbale; y la Secretaria (sic) citada, recibió; una vez que llegamos los tres vocales a la oficina, el Lic. Miguel Magaña Ávila, me ordeno (sic) instrumentar el acta de los hechos antes descritos, y que él me dictaría los documentos que contiene dicha bolsa tipo morral; por lo que el Lic. Miguel Magaña Ávila, procedió a abrir dicha bolsa; por lo que inmediatamente me fui a mi escritorio y de inmediato realice (sic) un formato de acta y se lo mostré al Lic. Miguel Magaña Ávila, para que me dictara el contenido de la bolsa, negándose a querer dictarme el contenido y procediendo a guardar en un lugar que él sólo sabe dicha bolsa. Sobre esta omisión, ofrezco como pruebas: el formato de acta que instrumente (sic) ese día (**anexo 1**) **y la confesión expresa del Lic. Miguel Magaña Ávila**, que hizo sobre esta omisión, el día 26 de febrero de 2016, en presencia de Usted (sic); de su Secretario Particular (sic); del Director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG; de la Contralora del IEEG; y de mis Compañeros de trabajo: el Lic. José Daniel Tovar Ramírez y Verónica Hernández Loyola [...] (lo subrayado es propio).

**SEXTO.** Que la excusa planteada por la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contralora del Instituto, en auto de diecisiete de junio del presente año, dictado dentro del procedimiento de investigación número I/001/2016/PRA, es del tenor siguiente:

[...] En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis.

**VISTO** el estado procedimental que guardan los autos que integran el expediente de investigación citado al rubro, y toda vez que del escrito de denuncia presentado por Saúl Rocha Arias, en su carácter de Vocal Secretario, de Administración y del Servicio

*Profesional Electoral de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz, Guanajuato, en contra de Miguel Magaña Ávila, en su calidad de Vocal Ejecutivo Regional de la misma Junta Ejecutiva Regional, presentada ante la Secretaría Ejecutiva de esta Instituto en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, recibida en esta Contraloría en misma fecha, se advierte de su contenido, lo siguiente:*

*[...] 1.- El día 17 de diciembre de 2015, a las 14:00 horas, nos encontrábamos los tres vocales de la oficina de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la Paz, apenas almozando camarones en un establecimiento sin nombre de la ciudad de san (sic) Luis de la Paz; cuando me percate (sic) que sonó el teléfono celular del Lic. Miguel Magaña Ávila, y alcance (sic) a escuchar que era Verónica Hernández Loyola, quién (sic) le informaba que en la oficina se encontraba una Señora (sic) de nombre María Elizabeth Ramírez García y que decía que había fungido como capacitadora en el proceso electoral pasado y que acudía a entregar un morral de una casilla que contenía actas originales de la elección 2015; a lo que el Lic. Miguel Magaña Ávila, le respondió: recíbale; y la Secretaria (sic) citada, recibió; una vez que llegamos los tres vocales a la oficina, el Lic. Miguel Magaña Ávila, me ordeno (sic) instrumentar el acta de los hechos antes descritos, y que él me dictaría los documentos que contiene dicha bolsa tipo morral; por lo que el Lic. Miguel Magaña Ávila, procedió a abrir dicha bolsa; por lo que inmediatamente me fui a mi escritorio y de inmediato realice (sic) un formato de acta y se lo mostré al Lic. Miguel Magaña Ávila, para que me dictara el contenido de la bolsa, negándose a querer dictarme el contenido y procediendo a guardar en un lugar que él sólo sabe dicha bolsa. Sobre esta omisión, ofrezco como pruebas: el formato de acta que instrumente (sic) ese día **(anexo 1) y la confesión expresa del Lic. Miguel Magaña Ávila**, que hizo sobre esta omisión, el día 26 de febrero de 2016, en presencia de Usted (sic); de su Secretario Particular (sic); del Director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG; de la Contralora del IEEG; y de mis Compañeros de trabajo: el Lic. José Daniel Tovar Ramírez y Verónica Hernández Loyola [...] (lo subrayado es propio).*

*Del anterior texto, se denota que el quejoso ofrece la confesión expresa de Miguel Magaña Ávila que, a decir del denunciante, se dio en presencia de la suscrita. Afirmación esta que, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que es cierta, como lo refiere el quejoso.*

*Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución General de la República, prevé el derecho fundamental de tutela judicial efectiva al establecer, en la parte conducente, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos de ley, además de que las actuaciones de orden*

*jurisdiccional que al efecto se dicten deben tener como ejes rectores los principios de prontitud, integridad e imparcialidad.*

*Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia, que la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución General, comprende diversos principios, siendo los siguientes:*

**ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.**

*La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.*

*Ahora bien, el artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, señala cuándo los servidores públicos se*

*encuentran impedidos de conocer un procedimiento, previendo en sus primeras seis fracciones los supuestos en los que se considera la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, señalando de manera expresa que esto ocurrirá cuando: 1) se tenga interés directo o indirecto en el asunto; 2) sea pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta segundo grado, civiles por afinidad de alguno de los interesados, de sus patronos o sus representantes; 3) hayan sido patronos o apoderados en el mismo asunto; 4) se tenga amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus patronos o representantes; 5) hayan dictado el acto o intervenido con cualquier carácter en su emisión o en su ejecución; 6) figuren como parte en un procedimiento proceso administrativo similar. Por otro lado, en la fracción VII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VI, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, sólo prevé que sea una situación análoga o más grave.*

*Cabe precisar que los impedimentos son obstáculos que evitan a una persona física, que funge como juzgador, ejercer la función jurisdiccional respecto a un litigio concreto. El impedimento está constituido por los factores, circunstancias o elementos que obstaculizan al juzgador para que imparcialmente conozca y falle una controversia que se ventile en un juicio.*

*Ahora bien, a consideración de este órgano instructor se actualiza el supuesto previsto en la fracción VII del artículo 29 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por las siguientes razones.*

*Al conocer de manera directa algunos de los hechos materia del presente procedimiento, como lo son las manifestaciones que tanto denunciante como denunciado realizaron en la reunión a la que refiere el denunciante en su escrito inicial de queja, adquiero la calidad de medio de prueba y órgano instructor y resolutor, situación que puede impedirme valorar objetivamente la prueba ofrecida por el quejoso, pues conozco las expresiones vertidas por el denunciado en mi calidad de partícipe de la reunión en comento, lo que podría afectar el derecho del incoado para probar los hechos en que sustente su defensa.*

*De igual manera, los hechos que dan origen a esta consideración son de semejante envergadura que los previstos en las primeras seis fracciones del artículo 29 antes*

*mencionado, porque se pone, a quien juzga, en una situación de riesgo que compromete la imparcialidad del ente resolutor, ya que participar de manera directa en los hechos que son materia del presente procedimiento (lo que me convierte en medio de prueba), se constituiría como un elemento que podría obstaculizar un análisis imparcial de las pruebas y los supuestos normativos aplicables.*

*A manera de abundar en lo sostenido, la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato establece un supuesto de impedimento específico, para aquellos juzgadores que hayan sido testigos en el asunto a resolver. La disposición en comento es la siguiente:*

*[...] Artículo 126.- El juez o magistrado deberá excusarse de conocer:*

*...*

*II. Cuando hubiere intervenido como Ministerio Público, defensor, denunciante o querellante, acusador particular, representante legal de cualquiera de los interesados, o hubiera actuado como perito, consultor técnico o conociera del hecho investigado como testigo, o tenga interés directo en el proceso [...]*

*Disposición que se considera pertinente resaltar, en virtud de que tanto los juzgadores en materia penal como los juzgadores en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos (función que realiza la suscrita), ejercen la potestad punitiva del Estado.*

*Lo anterior es acorde a lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”.*

*Así pues, por los anteriores argumentos se ordena comunicar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la presente excusa, así como turnar el expediente respectivo, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Lo anterior con fundamento en los artículos 29, fracción VII, 169 y 171 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.*

*Asimismo, y en razón de que el presente asunto se encuentra en etapa de investigación, se decreta la suspensión del mismo hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente.*

*Lo anterior con fundamento en los artículos 169 y 177 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.*

*Notifíquese personalmente a las partes. Cúmplase.*

*Así, lo acordó y firmó la Maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, Titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. [...]*

**SÉPTIMO.** Que de acuerdo al dispositivo señalado en el considerando segundo del presente acuerdo, corresponde al superior jerárquico de la maestra Ileana Catalina Sánchez Arriola, contralora del Instituto, calificar la excusa presentada por ella, siendo el superior jerárquico de la funcionaria mencionada el Consejo General del Instituto.

No pasa desapercibido que el artículo 448, primer párrafo, de la ley electoral local, dispone que la Contraloría es el órgano de control interno del Instituto Estatal que tendrá su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto; la cual estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones; esto no es óbice para establecer que el Consejo General es el superior jerárquico del órgano de control interno del Instituto, por las siguientes razones.

El Instituto Electoral es un organismo autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones según lo disponen los artículos 31, párrafo cuarto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 77, párrafo primero, de la ley comicial local.

Así, los artículos 31, párrafo quinto, de la Constitución local, y 81 de la ley comicial estatal, establecen que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Estatal.

Es decir, que el Instituto Electoral cuenta con su propia estructura administrativa —de la que forma parte la Contraloría—, la cual se encuentra bajo la dirección del Consejo General, permitiendo con ello la unificación en la toma de decisiones.

Ahora bien, para poder determinar si el Consejo General es o no el superior jerárquico de la titular de la Contraloría, es necesario señalar que la relación jerárquica<sup>1</sup> es definida como un vínculo administrativo al interior de un órgano, que subordina a los niveles inferiores con respecto al superior.

---

<sup>1</sup> “Relación jerárquica”. *Diccionario Jurídico Mexicano P-Z*. México: Editorial Porrúa, 1994.



Dicho vínculo, para Gabino Fraga<sup>2</sup>, implica los siguientes poderes de los órganos superiores sobre los inferiores:

1. **Poder de nombramiento.** Es la facultad que tienen los superiores para hacer, por medio de nombramientos, la designación de los titulares de los órganos que les están subordinados.

Al respecto, el Consejo General tiene poder de nombramiento sobre la persona que detenta la titularidad de la Contraloría, en razón de que el artículo 448, párrafo tercero, de la ley electoral local, dispone que el titular de la Contraloría será designado por el Consejo General con el voto de por lo menos cinco consejeros electorales, a propuesta de instituciones públicas de educación superior en el estado de Guanajuato.

2. **Poder de vigilancia.** Este poder se ejerce con todos aquellos actos que tienden a dar conocimiento a las autoridades superiores de la regularidad con que los inferiores están desempeñando sus funciones.

En este caso, el Consejo General tiene poder de vigilancia, en virtud de que el artículo 451, fracción XIX, de la ley comicial estatal, señala que la Contraloría es competente para presentar a este órgano colegiado los informes previo y anual de resultados de su gestión, y acudir ante el Consejo cuando así lo requiera el consejero presidente.

3. **Poder disciplinario.** Ante la falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública, nace la responsabilidad del autor que puede ser civil, penal o administrativa. La sanción disciplinaria la impone el superior jerárquico de quien comete la falta.

Sobre este punto, el artículo 450 de la ley electoral local establece las conductas en las que el Contralor puede ser sancionado, previendo que el secretario ejecutivo asumirá funciones de instrucción y sustanciación, y el Consejo General resolverá sobre la aplicación de sanciones al Contralor.

4. **Poder de mando.** Consiste en la facultad de las autoridades superiores de dar órdenes e instrucciones a los órganos inferiores. En cuanto a este punto, como ya se dijo, la ley electoral dispone que la Contraloría contará con autonomía técnica y de gestión; no es absoluta esta autonomía.

---

<sup>2</sup> Fraga, Gabino, *Derecho administrativo*, 34ª ed., México, Editorial Porrúa, 1996, páginas 167-172.

En efecto, el artículo 451, fracción XVIII, de la ley comicial estatal, señala que la Contraloría es competente para presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo. Es decir, que este órgano colegiado aprueba las actividades que durante el año realiza la Contraloría.

Asimismo, el párrafo quinto del artículo 448 del ordenamiento citado, establece que la Contraloría contará con la estructura orgánica, personal y recursos que el Consejo General apruebe.

De lo anterior, se desprende que, de forma indirecta, el Consejo General ejerce poder de mando sobre las actividades que realiza la Contraloría, pues al iniciar el año, las actividades que esta desarrollará deben ser aprobadas por este órgano colegiado, precisando que estas actividades son realizadas por la Contraloría con autonomía técnica y de gestión, ya que ni el Consejo General ni ningún otro órgano del Instituto intervienen en su ejecución, además de que la Contraloría cuenta con la facultad de emitir los lineamientos que regulen los procedimientos de su competencia, según se advierte de las fracciones I, II y X del artículo 451 la ley electoral para el estado.

5. **Poder de revisión.** Esto implica aprobación previa a los actos de los inferiores, suspenderlos, anularlos o reformarlos. Las facultades de suspender, anular o modificar los actos realizados por los inferiores, pueden tener como motivo la falta de oportunidad de los propios actos o su ilegalidad. Asimismo, señala el autor que puede ocurrir que la revisión de la legalidad de los actos de una autoridad esté encomendada a un órgano que no sea el superior jerárquico de aquélla; cuyo caso deberá existir una disposición expresa de la ley.

Respecto a este punto, no se actualiza dicho poder, en razón de que el artículo 447 de la ley electoral para el estado, dispone que las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.

6. **Poder para la resolución de conflictos de competencia.** Esto se da cuando alguno de los diversos órganos ligados por la relación jerárquica, se atribuye facultad que otro reclame o bien, porque ninguno se considere competente para actuar en un caso especial.

En el caso de la Contraloría del Instituto, es difícil que se presente una situación así, ya que no existe, dentro del Instituto, algún otro órgano que realice las funciones del órgano de control interno, pues

hay que tener presente que las funciones principales del Instituto son la organización de elecciones dentro del estado de Guanajuato, por medio de las cuales se renuevan los poderes ejecutivo, legislativo y los ayuntamientos de los municipios, así como la educación cívica en el estado, funciones en la que los demás servidores públicos del Instituto se enfocan.

Sin embargo, si dicho conflicto de competencia se llegara a presentar, el Consejo General sí tiene este poder para resolver el conflicto, toda vez que el artículo 92, fracción XXVII, de la ley comicial local, establece la facultad de este órgano colegiado para desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de esa ley, la cual regula las facultades de los órganos que integran el Instituto.

Por las anteriores consideraciones, es que este Consejo General es competente para calificar la excusa planteada por la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contralora del Instituto.

**OCTAVO.** Ahora bien, este Consejo General califica como procedente la excusa presentada por la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contralora del Instituto, por las siguientes consideraciones.

Previo a establecer estas razones, debemos señalar que por impedimento<sup>3</sup> se entiende obstáculo, embarazo o estorbo para algo.

Dispone el artículo 24 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los supuestos en los que los servidores públicos se encuentran impedidos para conocer de un asunto.

Así, en la fracción VII de la norma antes señalada, se establece un supuesto genérico, en el que se señala que es causa de impedimento cualquier otra situación análoga o más grave a las que se señalan en las demás fracciones.

Es en este supuesto genérico en el que se encuadra el impedimento señalado por la contralora del Instituto.

En efecto, en el escrito de denuncia, se ofrece la confesión expresa (así denominada por el quejoso), supuestamente realizada por el licenciado Miguel Magaña Ávila, Vocal Ejecutivo de la Junta Ejecutiva Regional de San Luis de la

---

<sup>3</sup> Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (24ª ed.). Consultado en <http://www.rae.es/>

Paz, en una reunión efectuada entre el denunciante, denunciado, secretario ejecutivo, secretario particular del secretario ejecutivo, titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y la contralora del Instituto.

En la excusa presentada por la contralora del Instituto, esta manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que efectivamente participó en dicha reunión, y realiza una serie de consideraciones jurídicas en las que sustenta el porqué su participación en la reunión le impide resolver el asunto con completa imparcialidad. Consideraciones jurídicas que, a juicio de este Consejo General, son correctas.

Por lo que, como se señala en la excusa planteada, la contralora al haber conocido de manera directa las manifestaciones realizadas por denunciante y denunciado en la reunión que, fuera de procedimiento, se llevó a cabo sobre los hechos litigiosos, adquirió la calidad de medio de prueba y, en particular, de testigo.

Por tanto, es inconcuso que la contralora no puede seguir contando con absoluta libertad para valorar las pruebas que las partes aporten al respectivo procedimiento, pues de manera directa ya conoció algunos de los hechos litigiosos y su ánimo como juzgadora se ve afectado, ya que desde el momento en que conoció de esos hechos y, en particular, de las manifestaciones ahí realizadas, la funcionaria pública empezó a formar un criterio sobre dichas cuestiones, lo cual puede ser a favor o en contra de alguna de las partes del procedimiento.

Lo anterior, conlleva a que la contralora no sea ajena del conflicto que va a resolver, pues, de cierta manera, conoció del mismo en otra instancia aunque esta no haya sido formal.

Todo esto hace que la función de impartir justicia en materia de responsabilidad administrativa, no pueda ser ejercida con imparcialidad como lo mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, como ya se dijo, la contralora tiene un obstáculo para valorar libremente las pruebas que las partes hagan llegar al procedimiento, en razón de que de manera directa, en una instancia informal, conoció algunos de los hechos materia del procedimiento.

Además, tal y como lo expone la contralora en su excusa, en la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, en su artículo 126, fracción II, se establece como impedimento específico de los jueces o magistrados, el conocer el hecho investigado como testigo. La disposición es la siguiente:

[...] **ARTÍCULO 126.** El juez o magistrado deberá excusarse de conocer:

[...]

II. Cuando hubiere intervenido como Ministerio Público, defensor, denunciante querellante, acusador particular, representante legal de cualquiera de los interesados, o hubiera actuado como perito, consultor técnico o **conociera del hecho investigado como testigo**, o tenga interés directo en el proceso; [...]

(Lo resaltado es propio)

Es decir, que en ese ordenamiento, el legislador sí señaló de manera expresa como un impedimento de los juzgadores, el conocer del hecho investigado como testigo, carácter que en el presente asunto tiene la contralora.

En consecuencia, y por las consideraciones antes expuestas, es que la situación en la que se encuentra la contralora del Instituto dentro del procedimiento de investigación I/001/2016/PRA, encuadra como análoga o más grave a las demás previstas en el artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; por lo que se califica como procedente la excusa planteada.

**NOVENO.** Disponen los párrafos segundo y tercero del artículo 171 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que la resolución que declare procedente la excusa deberá señalar el nombre del servidor público que habrá de conocer del asunto, quien habrá de tener la misma jerarquía que el servidor público impedido, y, en caso de no existir, será el superior jerárquico quien conozca del asunto.

Con base en estas disposiciones, este Consejo General considera que no existe un servidor público de igual jerarquía que la contralora del Instituto por las siguientes razones.

Como ya se señaló en el considerando séptimo del presente acuerdo, la Contraloría guarda una relación jerárquica con este Consejo General; ningún otro funcionario del Instituto tiene esa relación en la misma forma, debido a la estructura del Instituto que la ley comicial local dispone.

En efecto, señala el artículo 448, párrafo segundo, de la ley electoral del estado, que el titular de la Contraloría tendrá el nivel jerárquico equivalente a director de unidad técnica; dicho dispositivo únicamente es aplicado para efectos de remuneración económica de ese servidor público (tal y como se puede apreciar en la página web institucional del Instituto<sup>4</sup>), pues los directores de unidad técnica que se prevén en la ley —Sistemas de Información y

---

<sup>4</sup> <http://www.ieeg.org.mx/>

Telecomunicaciones y Jurídica y de lo Contencioso Electoral—, forman parte de la Junta Estatal Ejecutiva, la cual es coordinada y supervisada por el secretario ejecutivo, y presidida por el presidente de este Consejo General, según se obtiene de los artículos 93, fracción III, 95 y 96 de la ley comicial local.

De ahí, que ninguno de los directores que integran la Junta Estatal Ejecutiva tiene la relación jerárquica que la Contraloría tiene con este Consejo General, pues entre ellos y el Consejo General, se interpone la Junta Estatal Ejecutiva.

De igual forma, tampoco puede considerarse que el secretario ejecutivo tiene la misma jerarquía que la contralora del Instituto, pues aquél forma parte de la Junta Estatal Ejecutiva que es presidida por el presidente del Consejo General, además de que la Junta Ejecutiva Regional es un órgano colegiado y sus actividades son realizadas conforme a los programas que para tal efecto apruebe dicha junta.

Además, cabe señalar que en el escrito de denuncia se hace referencia a que en la reunión también estuvieron presentes el secretario ejecutivo y el director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, por lo que, aún y cuando se considerara que estos funcionarios pudieran conocer del presente asunto, misma suerte correrían respecto al impedimento para conocer del asunto.

También es importante destacar, que la Contraloría realiza funciones técnicas y especializadas, goza de autonomía técnica y de gestión, a diferencia de las demás áreas del Instituto.

Esto constituye una garantía a favor de las personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, pues al no depender jerárquicamente, de manera directa, de algún otro órgano o autoridad, las resoluciones que la Contraloría dicte serán sin intervención de factores externos, asegurando con ello la imparcialidad que debe existir en la función jurisdiccional.

Situación contraria a lo que ocurre con los demás servidores públicos del Instituto, que sí cuentan con superiores jerárquicos directos que pueden influir en las decisiones que tomen.

De igual forma, es pertinente señalar que los servidores del Instituto, con excepción de la Contraloría, están enfocados en realizar las actividades atinentes a la organización de elecciones y a la educación cívica —salvo el caso de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, que tiene como atribución instruir procedimientos sancionadores y, en algunos casos,

formular los proyectos de resolución—, por lo que, encomendar el presente asunto a algún otro servidor público, podría ser perjudicial para los derechos de las partes en razón de no estar especializados en la función jurisdiccional.

Por tanto, y por las razones antes mencionadas, este Consejo General se avocará al conocimiento del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa I/001/2016/PRA, así como las subsecuentes etapas procesales.

Ahora bien, en virtud de que el Consejo General es un órgano colegiado, y atendiendo al principio de celeridad procesal que rige en los procedimientos jurisdiccionales, se torna necesario designar a un consejero electoral para que asuma las funciones de investigación, en su caso, inicio de procedimiento, instrucción y elabore el proyecto de resolución correspondiente para ser sometido a consideración y, en su caso, aprobación por este Consejo General. En este sentido, se designa al Presidente del Consejo General, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, para que realice dichas funciones.

En atención a que procesalmente se requiere la existencia de un fedatario público respecto de las actuaciones del funcionario que instruye un procedimiento, cualquier que sea su naturaleza, por ello se habilita al personal que integra la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, para que auxilie en esta función al Presidente del Consejo General, en funciones de consejero instructor; asimismo, también se habilita al personal de dicha Unidad Técnica para que realice las funciones de actuaría.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafos primero y segundo, 81, 82, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 29, fracción VII, 169, 171, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

#### **ACUERDO:**

**PRIMERO.** Se califica como procedente la excusa planteada por la maestra Ileana Catalina Arriola Sánchez, contralora del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa I/001/2016/PRA.

**SEGUNDO.** El Consejo General del Instituto se avocará al conocimiento del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa I/001/2016/PRA, así como las subsecuentes etapas procesales, y se designa al Presidente del Consejo General, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, para que

asuma las funciones de investigación, en su caso, inicio de procedimiento, instrucción y elabore el proyecto de resolución correspondiente para ser sometido a consideración y, en su caso, aprobación por este Consejo General.

Se habilita al personal que integra la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que realice las funciones de fedatario y actuaría dentro del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa que instruirá el Presidente del Consejo General.

Notifíquese por estrados y personalmente al denunciante.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario Ejecutivo del mismo.